

# 28ª SESION ORDINARIA DEL 26 DE JULIO DE 1858

## Presidencia del Sr. Luque

### PRESIDENTE

ARAOZ  
SORIA  
LOPEZ (D. TIBURCIO)  
GARZON  
FEIJOO  
VALLE  
CORDILLO (D. V.)  
CORDILLO (D. J.)  
DURAN  
LOPEZ (D. RICARDO)  
DARACT  
LUCERO  
FERREIRA  
FONES  
GONZALEZ  
ZUVIRIA  
GRAZ  
OCAMPO  
QUESADA  
GARCIA  
NAVARRO  
WARCALDE  
CHENAUT  
ALVEAR  
CONDARCO  
COLODRERO  
VICTORICA

En el Paraná, Capital Provisoria de la Confederacion Argentina, á los veintiseis dias del mes de Julio de 1858, reunidos en su Sala de Sesiones los señores Diputados anotados al margen, con inasistencia de los señores Gutierrez, Posse (D. Filemon), Rodriguez sin aviso, y del señor Comas con él; el señor Presidente declaró abierta la sesion, y por no estar concluida el acta de la anterior se procedió á dar cuenta de los asuntos entrados en Secretaría en el orden siguiente:

1º Un mensaje del Excelentísimo señor Presidente de la Confederacion, fecha 24 del presente, acompa-

ñando los Tratados y Convencion Consular, celebrados por el Plenipotenciario Argentino con el Gobierno de Su Majestad Católica. Pasó este mensaje con los documentos adjuntos á la Comision de Peticiones y Negocios Extranjeros.

2º Un mensaje del señor Presidente del Honorable Senado comunicando que aquella Honorable Cámara, había tenido á bien aprobar con algunas modificaciones el proyecto de ley por el que se imponen derechos diferenciales á los productos de exportacion. Pasó este mensaje á la Comision de Hacienda.

3º Un proyecto de ley presentado por los señores Gutierrez, Graz y Zuviria para que se permita en la Confederacion el establecimiento de hermanas de la caridad sometidas á la regla de San Vicente de Paul. Pasó este proyecto á la Comision del Culto.

4º Un proyecto de ley presentado por los señores Warcalde y Navarro aboliendo la pena de palos á los militares, y sustituyéndola con la de cepo, prision ó aumento de servicio. Pasó este proyecto á la Comision de Legislacion y Negocios Constitucionales.

El señor Warcalde obtuvo la palabra y dijo: Señor: el proyecto que acaba de leerse no es otra cosa que el complemento de una de

las más preciosas prescripciones con que nuestra Constitución Nacional ha favorecido á todos los habitantes de la República.

El artículo 18 de la Constitución ha abolido los azotes y sería una monstruosa anomalía que aún estuviese vigente la ordenanza militar, que impone esta pena á los valientes soldados que tantas privaciones sufren en campaña y tan señalados servicios prestan en defensa de esa misma Constitución, que á ellos debe garantizar y proteger en sus derechos y regalías de hombre, como garante y protege á todos los que habitan nuestro suelo.

El Congreso Argentino, justo y equitativo como es en todos sus actos, no dudo que prestará su sancion al proyecto en favor del que pido el apoyo de mis honorables colegas de la Cámara de Diputados, pues no es posible que solo sobre la noble y benemérita clase militar pese una pena que á la vez que infama no corrige. El palo no importa la correccion del delincuente, mas bien parece una demostracion de ira del fuerte contra el débil.

Esa pena es humillante y vejatoria en sí misma, y bajo todos aspectos indigna del que viste la honorable casaca. Ahorremos sufrimientos á nuestros pobres soldados que harto penosa es la situacion que le cabe, como ha dicho muy bien un distinguido americano al solicitar la abolicion del palo ante un Congreso ilustrado. Evitémosle dolores y sangre. Reservemos esos padecimientos para el campo de batalla donde el deber los impone. Evitémos tan degradante pena.

Nuestra Constitución, señor, no ha podido ni querido establecer una odiosa excepcion contra el soldado.

El proyecto, pues, no contiene más que la declaracion terminante de que la pena de azotes está abolida no solo para las clases civiles de la sociedad sino tambien para el soldado; pues no es posible suponer de mejor condicion al extranjero que recién pisa nuestro territorio, que al soldado que á costa de su sangre y de su vida defiende la patria.

Todos los argentinos somos soldados de la Guardia Nacional, y la milicia sobre las armas al frente del enemigo está sujeta á la ordenanza militar. Todos, pues, quedaríamos expuestos á sufrir la pena cuya abolicion pido en nombre de la humanidad y en nombre del honor militar.

El señor Navarro: He tenido la honra de suscribir ese proyecto, porque él desarrolla un grande y alto pensamiento consignado en la Carta de Mayo.

El artículo 18 de la Constitución dice: «Quedan abolidas para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormentos, los azotes y las ejecuciones á lanza

ó cuchillo.» La ley fundamental del país ha querido en ese artículo, no solo ser humanitaria sino proteger á todo argentino contra la infamia que trae consigo el palo de azotes. Aunque algunavez se ha dicho, interpretando violentamente la Constitución, que el tormento y la pena de azotes han sido abolidos solamente por causas políticas, yo no entiendo así, al contrario, creo que lo ignominioso de esas penas ha sido quitado, generalmente hablando, de los Códigos argentinos. Seria absurdo pensar tambien que mientras que la Constitución eleva y protege las demás clases, haya querido dejar el tormento de los palos para los militares y para ellos solos, cuando lo quita para los demás argentinos. Además, creo en conciencia, que el tormento no es correccion en ningun caso, porque él degrada y la degradacion hunde más en el vicio al que lo sufre, por cualquiera falta que sea, y perdido el honor, la enmienda es imposible. Estas son ligeramente las razones porque he tenido el honor de poner mi firma al pié de ese proyecto.

El señor Presidente expuso que continuaba la discusion del artículo 38 del proyecto de ley de la Justicia Federal, suspendida en la sesion anterior. Se leyó aquél, su tenor es el siguiente:

Art. 38. Los Jueces y Fiscales de la Corte Suprema, los Jueces y Fiscales de las Cortes de Distrito y los de Seccion son inamovibles de su destino durante su buena comportacion

El señor Ferreira: La discusion de este artículo se suspendió para la sesion presente á causa de haberse suscitado algunas dudas sobre la conveniencia ó la constitucionalidad de su contenido. Estas han sido las fáces principales por las que se le consideró y sobre las que voy á llamar la atencion de la Honorable Cámara, respecto á su conformidad con la Constitución, la más indudable, porque la disposicion que contiene la veo establecida en el artículo 91, en donde al organizar el Poder Judicial de la Confederacion se establece, que será ejercido por una Corte Suprema, compuesta de nueve Jueces y dos Fiscales, que residirá en la Capital, y por los demás Tribunales inferiores que estableciere el Congreso en todo el territorio de la República. De manera que si la Constitución ha hecho á los Fiscales miembros de la Corte Suprema ha sido porque los ha considerado un elemento necesario para la buena expedicion de la administracion de Justicia; y al objeto de consultar el acuerdo en el ejercicio de las altas funciones que le han sido confiadas, ha integrado este Tribunal con dos de los expresados funcionarios. No solamente lo ha declarado así terminantemente la Constitución en

el artículo citado, sino que tenemos tambien en confirmacion de este principio la expresion viva del artículo 41, donde determinando los casos en que compete á la Cámara de Diputados acusar á los funcionarios públicos, incluye en el número de los enjuiciables á los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Pues en todo esto se vé que la Carta ha mirado las funciones de los Fiscales como una parte integrante é indispensable para el buen desempeño de una neta administracion de Justicia, anivelándolos con los Jueces de la Suprema en las garantías, modo y forma de hacer efectiva su responsabilidad. Así, señor, estos artículos son la base que debe servirnos de norma para deducir la constitucionalidad del que se discute, por cuánto en ellos se revela el verdadero carácter que la Constitucion ha dado á los Fiscales haciéndolos inamovibles con el hecho de declararlos miembros de la Suprema Corte, porque la conservacion de su personal en el todo ó parte, no puede estar dependiente de ningun otro Poder sin contrariar los fines constitucionales de esta institucion. Por consiguiente, si los hiciéramos amovibles á voluntad del Ejecutivo Nacional, violaríamos el texto y espíritu de la Carta, porque quedaría á disposicion de éste una parte de los miembros de aquel alto Tribunal desde que estaría en su mano removerlos arbitrariamente toda vez que los Fiscales no se prestasen á servir á sus miras y pretensiones por más injustas que pudiesen ser. Pondríamos entonces un grave inconveniente, que vendría á trabar la recta expedicion y buen éxito de las delicadas funciones de aquel Tribunal en los asuntos más espinosos, como serán siempre aquellos en que se ventile alguno sério en que tenga parte el Ejecutivo Nacional.

Si la Constitucion, pues, ha hecho inamovibles á los Fiscales de la Suprema, nos ha dado ya el punto de partida que debe guiarnos para investigar el carácter de los demás Fiscales de que se componen los Tribunales inferiores creados por la ley orgánica de la Justicia Federal. Claro es que á este respecto no ha sido el ánimo de los constituyentes desnaturalizar el noble oficio de la procuraduría fiscal, convirtiendo á los Fiscales en resorte ciego del Poder Ejecutivo, como sucedería en el caso de que se les redujera á la condicion que pretende el señor Ministro, es decir, que solo se les considere como simples ó meros apoderados del Ejecutivo Nacional; por cuanto ellos han puesto ya la base y determinado el punto de partida, estableciendo la inamovilidad de los de la Suprema Corte, que la ley debe seguir en la organizacion de los Tribunales inferiores.

Por otra parte, ningun artículo constitucio-

nal se opone á la inamovilidad de los Fiscales. El 93, que un señor Diputado ha citado como contrario, apegándose solo á la materialidad de sus palabras, más bien confirma que rechaza mi opinion, si se combina lo que en él se dispone con lo establecido en el artículo 91. En efecto, en aquel se declara, *que los Jueces de la Corte Suprema y de los Tribunales inferiores de la Confederacion conservan sus empleos mientras dure su buena conducta*, y en éste se expresa, *que los Fiscales son miembros de la Corte*. De suerte, que estando á la inteligencia que el señor Diputado ha dado á dicho artículo; parte de los miembros de la Suprema Corte no conservarían su destino durante su buena comportacion; lo cual importaría un ataque directo á la independenciamiento del personal de que se compone este Tribunal. Independencia que constituye el dogma de la teoria del derecho constitucional en el sistema representativo y que la Constitucion ha establecido bien claro en el artículo 92, prohibiendo al Poder Ejecutivo toda ingerencia en negocios judiciales.

Examinemos ahora la cuestion por la faz de la conveniencia. Bajo de este aspecto encuentro todavia ménos racional la mision que se les quiere dar á los Fiscales. Cuanto más inadmisibile me parece, señor, cuanto que ella traería muy graves y profundas dificultades para la buena administracion de Justicia que todos anhelamos plantear entre nosotros: pues privados los Fiscales de juicio propio en los asuntos sometidos á su patrocinio y reducidos á meros órganos del Poder Ejecutivo, como se pretende, tendrían que aceptar contra las convicciones íntimas de su conciencia la defensa de las causas más injustas, empleando el influjo de su posicion y recursos profesionales para extraviar el juicio recto de los Jueces á fin de conseguir un triunfo ínfimo.

Reduciendo la institucion fiscal á una mera agencia del Ejecutivo, no solo contrariamos la intencion manifiesta de la Constitucion y la legislacion de las naciones cultas de la moderna Europa, sino que nos apartaríamos de lo que dicta el buen sentido; porque introduciríamos en la administracion de Justicia un elemento viciado y eminentemente inmoal con notable daño del interés público bien entendido.

A la verdad, una condicion tan humillante haría desaparecer de la procuraduría fiscal las incalculables ventajas que solo pueden reportarse de la noble profesion del abogado cuando se le mantiene en la dignidad y altura que corresponden á su benéfica mision.

Así en garantía de la moral y bien público las leyes han prohibido á los abogados defender asuntos injustos, imponiéndoles severos castigos; y ¿qué razon suficiente puede alegarse, señores, para que se quite á los abogados

Fiscales la conciencia, haciéndolos instrumentos mecánicos del Poder Ejecutivo con grave perjuicio de los intereses públicos? Tan celosa ha sido la Carta en garantir estos intereses, que ha exigido en los miembros de la Corte Suprema las calidades de abogado argentino con ocho años de ejercicio en la profesion y las requeridas para ser Senador, pues ha creído que de otra manera no llenaría debidamente los grandes objetos de la administracion de Justicia de que era encargada. ¿Dónde está, entonces, la conveniencia para ennoblecer este oficio público que ha rendido tan útiles servicios en la práctica de los negocios judiciales, destituyéndolo de las condiciones inherentes á su buen desempeño, contra el propósito de la Constitucion, los principios de la moralidad y los intereses conocidos de la causa pública?

El señor Ministro ha aducido en la otra sesion por razon suficiente para establecer la amovilidad de los Fiscales, la necesidad de dar al Poder Ejecutivo órganos competentes, que hagan valederos sus derechos ante los Tribunales Federales, en donde tendrán que comparecer como un simple individuo particular; porque si se les dejase la libertad de negar su patrocinio á las demandas del Gobierno que creyesen injustas, la Confederacion se vería privada de medios competentes de defensa; que esta medida se hace tanto mas necesaria cuanto que por la Carta la Justicia Federal no procede de oficio y se ha menoscabado en cierta manera el elevado rango del Poder Ejecutivo, teniendo que descender hasta las bancas de los Tribunales. Mas, respetando como respeto los conocimientos del señor Ministro sobre la materia, tengo el desagrado de no estar de acuerdo con él á este respecto por ser mis convicciones enteramente distintas.

Contestaré á la última de estas observaciones, que solo con mucha exageracion puede decirse que se le rebaja ó hace descender al Poder Ejecutivo de su alta categoria cuando se le exige que comparezca ante los Tribunales Federales como uno de tantos individuos particulares en respetuosa observancia del principio fundamental que establece la igualdad absoluta ante la ley, que es el fruto precioso de las avanzadas conquistas del entendimiento humano, consagrado por la Justicia eterna de Dios, ante quien comparecen los grandes y los pequeños, los poderosos y los desvalidos, de una misma manera, sin distincion de personas, sin mas prerrogativas, títulos y recomendaciones que el mérito de sus propias obras.

Por otra parte, señor, la Constitucion, al establecer estos principios, no ha hecho mas que lo que debía hacer, atendidas las luces del siglo, y lo que han hecho, como ya otra

vez lo he recordado ante esta Honorable Cámara, todos los pueblos cultos é inteligentes, es decir, destruir los privilegios injustificables. Pues en cuanto á las atribuciones que constituyen el Poder y verdadero rango del Ejecutivo, mas bien ha sido larga que económica en sus concesiones, desde que le ha acordado mas de la que le competen segun los principios del sistema representativo republicano.

El Poder jamás descende cumpliendo con la ley, sino que por el contrario, se realza. Entonces no es cierta la razon de conveniencia fundada en un descenso imaginario.

La consideracion de que la Justicia Federal no procede de oficio, no puede servir de argumento para demostrar la conveniencia de hacer amovibles los Fiscales y mucho menos para reducirlos á la insignificante condicion de simples dependientes ó meros apoderados del Poder Ejecutivo, desvirtuando su carácter y las útiles funciones que han ejercido hasta hoy con provecho conocido de la Justicia. Porque el no proceder de oficio, no importa una restriccion de las atribuciones inherentes al Poder Judicial, ni mengua las que competen al Ejecutivo, de modo que se encuentran siempre con todos los medios y recursos que han tenido y se les concede en los pueblos bien constituidos. Si hasta ahora los intereses del Estado no han sufrido ningun menoscabo con la independencia y prerrogativas otorgadas al Ministerio Fiscal, sino que por el contrario, han sufrido poderosamente en el buen éxito de la Administracion de Justicia ¿dónde está la utilidad de dar al Poder Ejecutivo órganos diferentes, desmejorando la condicion de los Fiscales? La Carta, señor, se ha puesto á la altura de los mas adelantados avances de la ciencia política, cuando hábilmente ha trazado los lindes de la Justicia Federal. La simple idea de Juez nos da á conocer cuales son la naturaleza y funciones de la Judicatura, haciéndonos entender que no pueden ser otras que las conducentes á cortar y dirimir las contiendas procesales; pero jamás tomar la iniciativa inquisitorial de indagar hechos y crear los procesos. En efecto, los Jueces no pueden tener otra mision que la de fallar los asuntos que viniesen ante ellos, y esto es lo único que la Constitucion ha dispuesto al establecer que la Justicia Federal no proceda de oficio. No se ha quitado, pues, al Ejecutivo ninguno de los medios que tenía para defender sus derechos, sino que se ha introducido una mejora en la Administracion de Justicia, que mañana tendrán que adoptar en sus códigos las demás repúblicas del continente; cuando sientan la ventaja de apoyar sus instituciones en la extension y profundidad de alcance que nuestro sistema político ha confiado al Poder Judicial.

Si la novedad introducida por la Carta en la organizacion de la Justicia Federal es una verdadera mejora. Si ella no opone el menor obstáculo para que los Fiscales puedan ejercer su noble oficio con toda la amplitud que les incumbe, ni coarta los deberes que la ley les impone para defender con esmero los intereses del Fisco y los del Poder Ejecutivo, siempre que necesiten la proteccion de sus luces, como ha sucedido hasta el presente y lo practican continuamente, no veo entonces la ventaja en la necesidad de privar á la justicia del apoyo que ellas pueden prestarle abogando por los derechos del pobre y la debilidad de todos los particulares que tengan que luchar ante los Tribunales contra el poderoso influjo del Poder Ejecutivo en los asuntos injustos en que éste se halle interesado, solo por acomodarnos á prácticas usadas en los Estados Unidos del Norte, que no tienen antecedente alguno entre nosotros, ni pueden aplicarse sin gravísimos inconvenientes.

Por otra parte, si el derecho privado celoso de establecer el equilibrio de que depende la verdadera igualdad ante la ley, ha concedido privilegios á los menores, los ancianos y otras personas incapaces de defenderse por su propio desvalimiento, ¿qué razón puede ser bastante para hacer una excepcion injustificable respecto del Poder Ejecutivo robusteciendo su poderosa pujanza con la influencia y apoyo ciego del ministro Fiscal?

Ninguna, porque señor, no haríamos mas que recargar en un solo plato de la balanza judicial el inmenso peso del Poder que el Gobierno tiene en todas partes y que nuestra Constitucion ha ensanchado aumentando su influjo en la administracion de Justicia con el nombramiento de los funcionarios, con mas el patrocinio necesario de los Fiscales; mientras que en el otro dejaríamos por contrapeso la liviana debilidad del desvalido ó poco valimiento de los esfuerzos particulares.

Estas son las convicciones que me hacen desear que no se altere el carácter y condiciones del ministerio judicial para que continúe prestando los importantes servicios con que ha contribuido tan positivamente para lograr los benéficos objetos de la Justicia. He dicho.

El señor Gonzalez: Para ver claro en esta cuestion es preciso decir algo sobre la naturaleza de las funciones de los Fiscales; y nada mas conducente á este fin que dar la definicion de estos empleados que trae un célebre autor del derecho español. Entiéndese por Fiscal, señor, «cada uno de los abogados nombrados por el Rey (entre nosotros por el Poder Ejecutivo) para defender ante los Tribunales los intereses del Fisco y las causas pertenecientes á la vindicta pública.» Los Fiscales

tienen, segun esta definicion, dos atribuciones distintas: la primera es para entender exclusivamente en todo lo relativo á intereses y derechos del Fisco; es decir, del Tesoro público, de la Hacienda de la Confederacion; y la segunda para tomar parte en toda causa criminal sobre delitos públicos, ó sobre responsabilidad oficial.

En ambos casos, señor, los Fiscales proceden como agentes inmediatos del Poder Ejecutivo encargado por la Constitucion de defender los intereses del Fisco, y de mantener el orden y la tranquilidad de la Nacion. Son los abogados del Gobierno que gestionan ante los Tribunales Federales, entablado ya sea una accion civil para defender las propiedades de la Confederacion, ó hacer cumplir las obligaciones contraidas con ella; ya sea pidiendo la aplicacion de una pena al que ha cometido uno de esos delitos que no solo perjudican los intereses ó la persona de un individuo, sino que causan cierta alarma en la sociedad ofendida, que es necesario hacer desaparecer por medio de un pronto y justo castigo. En ambos casos es el Ejecutivo Nacional quien aparece ante los Tribunales representado por los Fiscales, sus abogados ó agentes inmediatos.

En vano se me dirá que el artículo 91 de la Constitucion Nacional los declara miembros de la Corte Suprema, al mencionarlos junto con los Jueces que la componen; porque esta circunstancia, por explícita que parezca, no puede cambiar la naturaleza de las funciones de estos empleados, que como acabo de demostrarlo, son y no pueden dejar de ser agentes del Poder Ejecutivo, y no del Poder Judicial. Si en el artículo citado los Fiscales aparecen mencionados con los Jueces de la Corte Suprema, es porque la naturaleza de sus funciones los coloca indispensablemente en ese puesto ante los Tribunales Federales; en contacto inmediato con ellos, ejerciendo el Poder delegado por el Gobierno. Este únicamente es el rol de los Fiscales, y no el de Jueces como han dicho algunos; rol que jamás desempeñan aquellos.

Tan cierto es esto que la Constitucion misma, cuando se trata de conceder á los Jueces una de sus más preciosas prerrogativas, la inamovilidad durante el buen desempeño de sus funciones, ni mencion hace de los Fiscales; y tiene buen cuidado de decir explícita y terminantemente en su artículo 93: Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Confederacion conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, etc. Luego son los Jueces únicamente, y no los Fiscales los que la Constitucion declara inamovibles; disposicion muy sabia, señor, y conforme con las Constituciones de todos los

pueblos ilustrados, que conocen la única misión de los gobiernos representativos.

Para probarlo, voy á permitirme citar varias Constituciones de las más conocidas, y en todas ellas se verá que solo los Jueces son declarados inamovibles.

Empezaré por el artículo 3.º de la Constitución de los Estados-Unidos que en su parte segunda dice así: los Jueces de la Corte Suprema, y de los demás Tribunales inferiores, conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Igual principio declara el artículo 252 de la Constitución Española del año 12 y el 69 de la actual. Igual disposición contienen las diversas Constituciones que han regido en Francia después de la revolución de 1789. Pueden verse el artículo 2, Capítulo V de la Constitución de 1771; el 206 de la del año 3; el 68 de la del año VIII; el 58 de la Carta de 1814; el 49 de la de 1830 y el 87 de la Constitución de 1848. Por fin, el mismo principio contiene el artículo 110 de la Constitución Chilena; y no conozco una sola Constitución ni ley de otra nación que declare inamovibles los Fiscales.

Luego ¿en qué consiste, señor, la innovación que dicen algunos vamos á establecer imitando á los Estados-Unidos si declaramos amovibles á todos los Fiscales? Léjos de ser una innovación, es la sanción de lo establecido en todas partes; y si declarásemos lo contrario, entonces sí podría decirse que innovábamos, haciendo una excepción muy original por cierto en lo que han dispuesto los legisladores de las naciones que he citado.

Los opositores á esta doctrina dicen, sin embargo, que, en otras los Fiscales son inamovibles; pero no están las leyes que así lo declaran, y mientras no lo hagan no podemos prestar fé á sus asertos en vista de tantas disposiciones terminantes que solo á los Jueces conceden esa prerrogativa. Cítense esas leyes, señor, y nos convenceremos; no basta decir una cosa, es necesario probarla, y mientras yo no conozca esas disposiciones sostendré lo contrario.

Además, señor, la Constitución no solo declara únicamente á los Jueces inamovibles, sino que prohíbe en mi concepto hacer igual declaración respecto de los Fiscales, á estar por el principio contenido en el artículo 83 atribución 10. En este artículo se establece como principio general que el Poder Ejecutivo nombra y remueve por sí solo los empleados de la administración, cuyo nombramiento ó remoción no están reglados de otra manera por la Constitución. Como excepciones á este principio pueden señalarse: 1.º los Ministros Plenipotenciarios y Encargados de Negocios que el Ejecutivo nombra y remueve con acuerdo del Senado; 2.º la concesión de empleos ó

grados de oficiales superiores del Ejército y Armada, que también son provistos por el Ejecutivo con acuerdo del Senado; y 3.º el nombramiento de los Magistrados ó Jueces de la Corte Suprema y demás Tribunales Federales que hace igualmente con acuerdo del Senado. Fuera de esos casos el Poder Ejecutivo nombra y remueve por sí solo los demás empleados.

Resulta pues, que no estando los Fiscales comprendidos en las excepciones indicadas, lo están en el principio general; es decir, que el Poder Ejecutivo puede nombrarlos y removerlos por sí solo cuando lo crea conveniente. En una palabra, resulta que los Fiscales son amovibles como todos los empleados que no están exceptuados por la Constitución, y como ésta solo exceptúa los Jueces de la Corte Suprema y de los demás Tribunales de la Confederación, nosotros no podemos hacer lo mismo respecto á los Fiscales, arrebatando al Ejecutivo una atribución que la Constitución le acuerda.

Por otra parte, señor, fíjense los partidarios de la inamovilidad de los Fiscales en el conflicto en que vamos á poner al Ejecutivo si ordena al Fiscal entablar tal acción y que el Fiscal se rehuse á hacerlo, pretextando que es injusta esa acción; si el Fiscal es inamovible, el Ejecutivo tiene que conformarse con el juicio del Fiscal, y callarse, descuidando en mi concepto el cumplimiento de su deber. A esta objeción se contesta que el Ejecutivo puede nombrar un abogado que entable esa acción; pero, señor, ¿con qué carácter se ha de presentar ese abogado ante los Tribunales, si no va con el de Fiscal? ¿O se pretende que el Presidente de la República le extienda un poder ante escribano como haría un particular?... Esto no es posible, señor, porque los Fiscales son los abogados del Gobierno, y éste no puede servirse sino de ellos para gestionar los intereses del Fisco. Nada más natural por consiguiente que si ese Fiscal ó ese abogado no cumple con lo mandado por el Gobierno á quien representa, éste pueda removerlo, y nombrar otro que merezca su confianza.

Se exclama, señor, que si no se declaran inamovibles los Fiscales, van á perjudicarse los pobres, los menores y las viudas; se pinta la sociedad desvalida y sin socorro y á merced del Gobierno. Francamente, señor, no sé á qué conduce esta exclamación, porque no sé que tengan que hacer los Fiscales con los menores y los pobres que tienen en todas partes un defensor especial pagado para que los defienda; ni es posible tampoco suponer que el Gobierno tenga siempre la intención de hacer proceder mal á los Fiscales, y que ha de destituir á los que sean honrados. Estas

son exajeraciones que no conducen á la verdad, porque extravían la razon. El Gobierno no es un mónstruo tan perverso que esté siempre decidido á cometer injusticias; no, señor, lo contrario lo estamos viendo todos los dias, y aunque yo no estoy de acuerdo con muchos de sus actos, tengo bastante franqueza para declararlo.

Creo haber demostrado, señor, que los Fiscales, como agentes inmediatos del Poder Ejecutivo, no deben ser declarados inamovibles.

El señor Ministro de Justicia: Es muy poco lo que agregaré á lo expuesto por el señor Diputado preopinante en favor de la inamovilidad de los Fiscales, y solo me contraeré á contestar algunas observaciones hechas por un señor Diputado por Córdoba. El señor Diputado ha dicho que la amovilidad en los Fiscales los convertiría en órganos sin juicio propio, en agentes sin conciencia del Poder Ejecutivo. Esta es, señor, una exajeracion que deseaba hacer notar á la Honorable Cámara, para que no votase bajo la presion irreflexiva de esas palabras tan graves; porque de ninguna manera se deduce de la amovilidad de los empleados que ellos hayan de ser órganos sin juicio propio, puesto que los Ministros de Estado, que están en el mismo caso, no pueden suponerse instrumentos ciegos del Poder Ejecutivo, aunque sean amovibles. La Constitucion los hace responsables de sus actos, y mal se concibe la responsabilidad para actos ajenos en que no ha concurrido el juicio propio. Lo único que puede decirse es, que los Fiscales se verían alguna vez, en caso de conflicto con el Gobierno, entre su deber de abogado y el temor de perder su posicion; pero en un caso semejante, jamás puede dudar un hombre de bien, y el señor Diputado no debe, en honor á la profesion, encontrar un peligro en el caso propuesto. Además de esto estas suposiciones no llegan jamás á realizarse, ó se realizan rarísima vez, porque un Fiscal, cuando cree que el Gobierno no tiene razon, consulta con él antes de proceder, y en las rarísimas ocasiones en que pudiera suceder que un Fiscal estuviese en oposicion á la opinion y exigencias del Gobierno, entonces lo reemplazaría; y antes de removerlo haría lo que con todos los administradores, le prevenía que encontraba en tal circunstancia una falta de desempeño en sus deberes; y solo entonces se hallaría el Fiscal en el caso de perder el empleo, ó complacer al Gobierno, y defender una causa contra su conciencia. No se diga entonces que el Fiscal es un instrumento ciego del Ejecutivo, porque como he dicho antes, esto es exajerado.

Todas las demás razones que ha aducido el señor Diputado á quien contesto, concurren

á probar lo único que es indispensable en el Poder Judicial, la inamovilidad de los Jueces. Pero del Juez al Fiscal hay mucha diferencia: el Fiscal es una de las partes; pero el Juez está mucho mas arriba, y por consiguiente para mantenerlo en esa altura é independencia es necesario darle inamovilidad; es necesario ser consecuente tambien con las prescripciones de aquella que solo habla de los Jueces y no hace la menor referencia á los Fiscales cuando establece la inamovilidad en los primeros.

Por otra parte, señor, si el Fiscal es el abogado y defensor del Gobierno, si éste es su poderdante, debe tener el derecho de removerlo cuando lo defienda mal ó se niegue á cumplir con este deber, porque el señor Diputado comprenderá, sin duda, que el abogado del Gobierno debe estar sujeto á su juicio como lo está el abogado de la otra parte á su cliente.

Si hemos establecido que la Justicia Federal no procede de oficio, si por esta razon no puede traer á su conocimiento las causas que el Fiscal no presente á su fallo, es claro que el Gobierno no tendría como defender sus derechos cuando aquél no le encontrase justicia ó se negase á defenderlo. Por otra parte, señor, si la verdadera libertad consiste en hacer á todos los poderes igualmente soberanos, y al mismo tiempo sujetos á la ley; si con este fin la Constitucion ha querido que los miembros del Poder Ejecutivo y del Judicial estén sujetos al juicio político del Congreso, si el Gobierno, en fin, tiene que presentarse ante los Tribunales Federales como un solo individuo en los casos en que la Confederacion es parte, ¿por qué se le quieren negar entonces las mismas ventajas que se conceden á la otra parte? ¿No sería esto facultar á esos Fiscales inamovibles para que no le concedan la razon siempre que se interesen por un tercero, por un contrabandista tal vez? Porque es muy fácil sin duda que un contrabandista se ponga en inteligencia con el Fiscal; y entonces véase como la hermosísima calidad de la inamovilidad que garante la independencia y acierto de los Jueces, viene á ser mas bien un motivo de tentacion para los Fiscales.

Otro señor Diputado ha pedido la amovilidad de los Fiscales de la Suprema Corte. El proyecto del Gobierno la establecía tambien; pero no he insistido en ese punto, porque así salvarían esos altos funcionarios su responsabilidad ante la opinion pública.

El señor Ferreyra: Me limitaré á responder á las interpelaciones que me ha hecho el señor Ministro y contestar brevemente las objeciones con que un señor Diputado por Mendoza ha impugnado el artículo en discusion. Me pregunta el señor Ministro ¿cuál es el medio

que le queda al Gobierno para hacer valer en juicio sus derechos, cuando el Fiscal los defiende mal por ignorancia ó malicia, ó bien se niegue á patrocinar sus pretensiones, porque las crea injustas, si no tiene el poder de removerlo?

Conozco muy bien la extension de los conocimientos del señor Ministro sobre esta materia y por lo mismo me es extraño que haya podido escaparse á sus luces, que cuando un Fiscal no cumple con sus deberes puede ser juzgado por los Tribunales, del mismo modo que juzgan á los demás abogados que defienden mal sus causas. ¿Donde está, pues, el peligro de que estos funcionarios no procedan bien en los asuntos que les encomiende el Gobierno, porque se les declare inamovibles?

El señor Ministro: Los demás abogados son acusados por alguien; pero los Fiscales no están en ese caso.

El señor Ferreyra: Se hallan en iguales circunstancias y no hay razon para negar á la parte ofendida el derecho de acusarlos, es decir, al Gobierno.

El señor Ministro: ¿Y á qué abogado ocupará el Gobierno si el Fiscal es el único que lo representa ante los Tribunales?

El señor Ferreyra: Cuando un Fiscal se niegue injustamente á defender al Ejecutivo, le remplazará con otro para esa causa, y si éste se negase tambien, tiene en su mano los medios y recursos que tienen los particulares para buscarse abogado que patrocine sus derechos.

No se diga, pues, que los Fiscales son los únicos que pueden representar al Gobierno en lo judicial y que toda vez que no cuente con su apoyo, no le queda ya puerta ni medio alguno de hacer valer sus derechos ante los Tribunales de Justicia, como si se le redujera á la miserable condicion de un preso infeliz engrillado, sin accion ni valimiento. Mucho mas cuando solo puede admitirse la hipótesis de que suceda, por una rareza, que los Fiscales desatiendan con injusticia las demandas del Ejecutivo, si se atienden los respetos, inmenso poder y valioso influjo que éste ejercerá siempre por su rango y los recursos de que puede disponer.

Si sucediese, señor, que algun Fiscal faltase á sus deberes en asuntos del Gobierno, su castigo sería mas efectivo que en ningun otro caso, porque siendo el mas poderoso, se haría escuchar y acatar con mejor suceso que las mas elevadas dignidades eclesiásticas, las clases mas altas de la milicia y aún el mismo Congreso.

El señor Ministro: Sería depuesto solamente, y esto en el último caso.

El señor Ferreyra: Algo mas, señor, según fuese la gravedad de la falta; pero que no sea

sino depuesto del empleo, es decir, que el Gobierno, habia podido hacerlo remover de su destino por justa causa. Entonces está suficientemente garantido contra los abusos que pudieran cometer los Fiscales sin que sea preciso convertirlos en meros instrumentos del Poder Ejecutivo.

Contestaré ahora á la impugnacion que el señor diputado por Mendoza ha hecho fundándose en que el artículo 93 de la Constitucion fija la inamovilidad de los Jueces excluyendo intencionalmente á los Fiscales. En confirmacion de su opinion ha citado una lista numerosa de las Constituciones de otras naciones, donde dice que no se encuentra disposicion alguna que estatuya la inamovilidad de estos funcionarios, y especialmente la de Chile, que contiene un artículo semejante al 93 mencionado y en donde es sabido que son amovibles á voluntad del Gobierno.

La inamovilidad acordada á los Jueces en el artículo 93 no puede limitarse á éstos solos con exclusion de los Fiscales, sin herir en una parte delicada la independencia del Poder Judicial, cuya esfera no solo comprende la accion directa é inmediata que tienen aquellos, sino la secundaria, pero bien influyente, que estos ejercen en la administracion de Justicia. Tanto mas cuanto que por las instituciones de todas las naciones europeas de que yo tengo noticias, inclusa la España, los Fiscales desempeñan un oficio público muy importante, como encargados de defender la jurisdiccion nacional ó intereses públicos. Son unos agentes de mas elevado rango que los procuradores de número, y el Poder Judicial no puede ser completamente independiente, mientras no lo sean los agentes que intervienen en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto al principio que se ha querido establecer sobre que en ninguna Constitucion se encuentra la inamovilidad de los Fiscales, no se necesita haber hecho prolijos registros para manifestar la inexactitud de semejante asercion.

Creo poder afirmar que cuando menos la aseveracion no es cierta respecto del Perú, Chile y Bolivia, donde los Fiscales no son removibles, á voluntad del Ejecutivo, lo que nos hace ver que si esto sucede en Chile á pesar de que su Constitucion tiene un artículo semejante al 93 presentado, es porque allí, como aquí, cuando se habla de la independencia de los Jueces, se comprende tambien á los fiscales y demás funcionarios subalternos de la administracion de Justicia.

Concluiré rechazando las tergiversaciones que el señor Ministro ha dado á algunos de mis conceptos. Cuando he dicho, señor, que era conveniente y aun necesario dejar á los Fiscales la atribucion que han tenido siempre



de postergar con su patrocinio á los desvalidos y menesterosos, no he considerado al Gobierno con las propensiones y la actitud del león ó del tigre, dispuesto á dar manotadas y asechar á los particulares. No; me he referido á los casos, que no serán raros, en que los intereses de algun individuo privado chocan con los del Gobierno y que ese individuo reuna al desvalimiento individual la condicion de ser miserable por su pobreza.

Entonces he dicho que no solo era conveniente sino necesario que los Fiscales fueran dueños de su conciencia para que pudieran obrar con libertad y proteger al débil si estaba de su parte la justicia; porque así se consultaría la igualdad ante la ley, la cual yo creia inconciliable con la dependencia, que les imponía la precision de ser ciegos defensores del Poder Ejecutivo.

El señor Funes: No pretendo que este artículo sea estrictamente constitucional, porque entonces no habría motivo de cuestion; pero tampoco creo que los señores Diputados de la oposicion me demuestren con el texto expreso de la Carta la inamovilidad de los Fiscales. Creo, pues, que en el caso de que aquella no sea explícita en sus prescripciones, debemos salvar ante todo los principios consignados en ella. Se dice que el Fiscal es un órgano, un delegado del Ejecutivo. Pero, señor, el Fiscal, por la Constitucion compone el Poder Judicial, y segun esa misma Constitucion lo expresa, jamás el Ejecutivo podrá ejercer atribuciones judiciales; luego menos podría ejercerlas el Fiscal que se supone un delegado de aquel. ¿Cómo se comprende entonces que el Fiscal pueda mas que el Poder Ejecutivo de quien sería un mero delegado? No, señor; el Fiscal es miembro del Poder Judicial, y de este principio constitucional reconocido se deduce, que debe tener la misma independencia que los Jueces, para que el Ejecutivo no pueda influir jamás en los fallos de los Tribunales Federales.

Un señor Diputado se ha tomado la molestia de registrar constituciones para citar algunos de sus artículos que hacen referencia á los Jueces; pero no ha expresado su texto, ni tenido presente que el Poder Judicial, que tiene alguna analogía con el nuestro, es el de Norte-América que el señor Diputado ha olvidado citar y en el que debió fundarse especialmente si quería dar alguna fuerza á sus razonamientos. Pues bien, la Constitucion de Norte-América, solamente menciona los Jueces de la Corte Suprema y los demás inferiores, sin hacer referencia á los Fiscales; mas segun nuestra Constitucion, los Fiscales son miembros de la Suprema Corte. Por consiguiente, el señor Diputado verá que la única Constitucion que puede citarse como ejemplo

prueba mas bien lo contrario de lo que él pretende.

Siendo los Fiscales por nuestra Constitucion miembros de la Corte Suprema, y exigiéndose en ellos las mismas cualidades que los Jueces, se deduce que para ser lógicos debemos igualmente garantizar su independencia, haciéndolos inamovibles durante su buena comportacion. Como he dicho, si el señor Diputado hubiera sido mas explícito en las citas que ha hecho de algunas constituciones, no habría podido menos de confesar que aun en esos países los Fiscales son considerados verdaderos magistrados. Repito que aun en esos países se pueden decir en cierto modo inamovibles, puesto que son nombrados por un término fijo, y no está en el arbitrio del Ejecutivo removerlos cuando lo crea conveniente. Como ha contestado uno de los miembros de la Comision, en las Repúblicas Sud-Americanas tampoco son amovibles los Fiscales por la sola voluntad del Ejecutivo. Es un grave error creer que el Fiscal es un órgano, un agente de aquél; apenas podría atribuírsele en algun modo ese carácter en las monarquías en donde se les llama *Procurador del Rey*; mas en el sistema republicano, y mucho mas en nuestra especial organizacion, el Fiscal, como uno de tantos magistrados, recibe sus atribuciones de la Constitucion, no del Poder Ejecutivo; es el abogado de la ley que defiende los intereses de la Nacion; persigue los crímenes, y en nombre de la sociedad defiende las instituciones. La digna mision que desempeña este alto funcionario, hace indispensable garantizar su independencia. Tan cierto es esto, que, si ahora no se sanciona su inamovilidad por la Honorable Cámara, me consuela la esperanza que en adelante, con la mejor ilustracion que produce la experiencia, acordará á los Fiscales la inamovilidad durante su buena comportacion.

El señor Ministro ha dicho, que así como el Poder Ejecutivo puede remover los ministros del despacho, debe tener atribucion tambien para remover los Fiscales que se consideran como abogados ó defensores de aquél en los casos en que la Confederacion es parte. Pero el señor Ministro no se ha fijado en que hay mucha diferencia entre los Ministros del despacho y los Fiscales que son miembros del Poder Judicial, y que por lo mismo no son como los primeros miembros del Poder Judicial. Por consiguiente, la comparacion que hace el señor Ministro no tiene aplicacion alguna en esta discusion; porque es sabido que el Ministerio no es un empleo propiamente, sino una comision temporaria.

¿Cómo se comprende, señor, que un Fiscal debe tener siempre la obligacion de dar la razon al Gobierno? ¿Cómo no se concibe que es-

to es contrario á la dignidad del hombre, y que vamos á poner en muchos casos á esos funcionarios, que deben ser tan independientes como los Jueces, en la dura alternativa de faltar á su deber, ó perder su puesto si no ceden á las pretensiones del Ejecutivo, sufriendo inmotivadamente el desaire que siempre trae consigo la deposicion?

Se ha creído, señor, que el Ejecutivo es el fisco: esto es una equivocacion muy grave del señor Diputado que ha citado una definicion del Fiscal en la que se supone á este magistrado el defensor de los intereses del fisco y de las causas pertenecientes á la vindicta pública. El Poder Ejecutivo administra ejerciendo las facultades que en él ha delegado la Nacion; mas no puede salir un paso de la órbita de sus atribuciones. Tampoco es el mismo Poder que sirve á los intereses generales; cada uno en su esfera contribuye á sostener el orden público, y garante los intereses generales y derechos de los particulares. Así sería injusto exigir á un magistrado que declarase contrabando lo que no lo era verdaderamente. Cuando el Poder Ejecutivo exigiera del Fiscal que acusara por contrabando á tal ó cual comerciante, si el Fiscal, por el exámen del proceso, no lo hallase justo, no debe acusarlo; al contrario, debe defenderlo en defensa de las leyes que ha jurado sostener. ¿Se teme que un Fiscal pueda ser inepto, tal vez injusto? Este inconveniente tambien es posible en los Jueces, y aun mayor en este caso, porque los Jueces deciden, y el Fiscal solamente opina, pide. Por consiguiente, la posible falibilidad de un magistrado, no siendo admisible para hacer amovibles á los Jueces, tampoco debe aducirse con respecto á los Fiscales.

El señor Ministro de Justicia: El señor Diputado ha pretendido probar que se quiere hacer á los Fiscales órganos sin conciencia y sin juicio propio; pero no se fija en que eso no puede deducirse de que los Fiscales se declaren amovibles; porque sería preciso suponer órganos sin conciencia ni juicio propio á todos los empleados de la administracion, incluso los Ministros del despacho que tienen la misma cualidad, y á quienes se le haría una injuria inmerecida con semejante suposicion. Cuando he dicho que los Fiscales por ser amovibles no serán órganos sin conciencia ni juicio propio, no he querido decir que aquellos sean miembros del Poder Judicial ni del Ejecutivo; pero sí he querido demostrar que la circunstancia de ser amovible un empleo no expone el honor del individuo que lo desempeña, ni lo convierte en instrumento ciego del poder que tiene facultad para removerlo. Pero se dice que no es el Gobierno sino el Poder Judicial quien debe defender los intereses de la Confederacion en las causas en

que ella sea parte, deduciendo este aserto de un artículo constitucional que prohíbe al Ejecutivo ejercer atribuciones judiciales. Yo bien sé, señor, que el Gobierno jamás administra justicia, y jamás he tenido la idea de negar al Poder Judicial ese derecho; pero el señor Diputado debe fijarse en que no es el que defiende el que hace la Justicia; es la Suprema Corte, sin duda, quien la administra cuando la Confederacion es parte; pero no es menos cierto que es el Gobierno quien representa los derechos de la Confederacion, y que el Fiscal es el encargado de defenderlos. Véase, pues, como éste, á pesar de ser un miembro del Poder Judicial, tiene un carácter muy diverso del de los Jueces. Ahora bien, si el Ejecutivo nombra esos Fiscales, es claro que puede removerlos, puesto que por la atribucion 10ª del artículo 83, aquel tiene la facultad de nombrar y remover todos los empleados de la administracion. Este es, señor, un argumento fuerte en contra de la inamovilidad de los Fiscales á que no se ha dado todavía una solucion satisfactoria.

No se pretende tampoco que un Fiscal defienda una causa contra su conciencia: no, señor, si la encuentra justa la defenderá, y si por el contrario, no será obligado á defenderla; pero el Gobierno que debe vigilar siempre sobre la conducta de ese funcionario, verá si el fiscal tiene por costumbre no defender jamás las causas en que la Confederacion sea parte, en cuyo caso no se puede negar al Gobierno el derecho de amonestarlo á que cumpla con sus deberes, y hasta el de removerlo cuando fuese necesario. Esto es lo mismo que se hace con todos los administradores, á quienes no destituye sino en el caso de que éstos abusen con arrogancia y descuiden sus deberes con escándalo. Esta es la práctica, señor.

No sé pues, porque se dice que el Gobierno estará removiendo á los Fiscales todos los dias: no señor, se dice que si faltan á sus deberes los removerá; pero hay ciertos casos en que el descuido de un deber es un crimen, y otros en que no lo es y que no pueden dar lugar á la destitucion. Bien sé que si se prueba á un Fiscal que se ha dejado sobornar, se le puede llevar ante un Tribunal y hacerle aplicar la ley; pero tampoco se puede negar al Gobierno el derecho de removerlo cuando ese Fiscal no defiende con interés las causas de la Confederacion, porque no debe abandonarlas el Gobierno. Esta es una razon mas para que los Fiscales sean amovibles; porque de lo contrario estos serían los únicos empleados de la administracion verdaderamente irresponsables.

Por todas estas razones, pues, deseo que se declare la amovilidad de los Fiscales de los

Tribunales inferiores á lo que prescribe la Carta.

El señor Funes: Todas las observaciones que se han hecho en contestacion del principio de la inamovilidad de los Fiscales están demás, porque los mismos inconvenientes que se aducen para declararlos inamovibles nos presenta un Juez que por omision ó ignorancia perjudica á la Confederacion; y en el mismo caso se hallan el Presidente ó Vicepresidente de la Confederacion cuando faltan á sus deberes. Pero esos inconvenientes de consideracion general no se presentan sino muy rara vez, y la Constitucion ha previsto el modo de removerlos. Por consiguiente el mal que podria resultar de la inamovilidad de los Fiscales seria remediado; se evitaria del mismo modo que los abusos que pudieran cometer los Jueces ó los mas altos funcionarios del Poder Ejecutivo.

Pero deseo que el señor Ministro se fije en el principio de que los Fiscales, por la Constitucion, ejercen atribuciones judiciales, y en que no se puede suponer que sean órganos del Poder Ejecutivo cuando éste no puede ejercer aquellas. No digo, señor, que la Constitucion exprese terminantemente que los Fiscales ejerzan atribuciones judiciales; pero esto se deduce de su espíritu desde que les da la misma importancia que á los Jueces, exigiendo en aquéllos las mismas condiciones que en éstos. Se ve, pues, que si un Fiscal de la Suprema Corte se considera inamovible, porque es miembro de ese Tribunal, uno que es miembro de la Corte de Distrito debe tener la misma cualidad. ¿Cuál es, pues, la razon para declarar amovibles á los Fiscales de las Cortes de Distrito? ¿La de que la Constitucion no les acuerda terminantemente la inamovilidad? Pero, señor, no es preciso que la Constitucion lo diga, es una cosa que se deduce de sus principios en contra de los cuales no podemos legislar. Es por esto que la Comision insiste en que se declaren inamovibles los Fiscales de las Cortes de Distrito.

El señor Ministro de Justicia: El señor Diputado ha repetido que los Fiscales ejercen atribuciones judiciales. No, señor, porque la Constitucion dice terminantemente en su artículo 91 que la Justicia Federal de la Confederacion será ejercida por una Corte Suprema compuesta de nueve Jueces, y aunque en el mismo artículo se nombra á los Fiscales, no les da el mismo carácter que á los Jueces, puesto que en el artículo 93 en que establece la inamovilidad de éstos, no hace la menor referencia á los primeros.

El señor Funes: La Suprema Corte se compone de nueve Jueces y dos Fiscales, segun lo expresa el mismo artículo constitucional que el señor Ministro ha recordado. Lue-

go los Fiscales ejercen atribuciones judiciales.

El señor Ministro continuó: A estar por la lógica del señor Diputado, debiéramos declarar inamovibles á los empleados subalternos como una consecuencia del principio de la inamovilidad de los Jueces, aunque la Carta en el artículo 93 solo conceda esa cualidad á los Jueces.

Se dice que los Fiscales tienen atribuciones que no pueden ejercer con independencia, si no los declaramos inamovibles. Pero señor, esas atribuciones todavia no han sido fijadas, y cuando lo sean no pueden ser otras que las que corresponden á todos los Fiscales, es decir, que informarán al tribunal en las causas que vengan á su fallo comentando la ley y pidiendo su aplicacion; pero esto no importa tener voto en los fallos de ese Tribunal ni requiere en ellos la inamovilidad, porque están en el caso de cualquier otro abogado que defiende á una de las partes. Si esto es lo que se llama ejercer un cargo judicial, sin duda que el Fiscal lo ejerce, porque tiene el deber de estudiar y comentar la ley para deducir de ella la pena que debe aconsejar al Tribunal; pero de esto no se deduce que el Fiscal sea Juez, sino que defiende á la Confederacion en los casos en que ella sea parte, y que debe ser amovible para no dejar á aquella en peor condicion que la otra parte que tiene el derecho de elegir sus defensores.

Se dice que no se opone á la Constitucion la inamovilidad de los Fiscales, y que mas bien se deduce de las prescripciones de aquella, porque exige en los Fiscales las mismas condiciones que en los Jueces. Es cierto, señor, que la carta exige en los Jueces y Fiscales las mismas condiciones de idoneidad, es decir, que tengan ocho años de ejercicio y las cualidades requeridas para ser Senador. Pero es una cosa digna de notarse y un argumento incontestable contra la inamovilidad de los Fiscales, que en el artículo 93, único en que la Constitucion habla de la inamovilidad, dice terminantemente: «Los Jueces de la Corte Suprema y de los Tribunales inferiores de la Confederacion conservarán sus empleos mientras duré su buena conducta», y no dice una palabra de los Fiscales. Es, pues, incontestable el derecho que tienen los Jueces á esa prerrogativa mientras desempeñen debidamente su cargo. Pero me veo, señor, en la necesidad de repetir que los Fiscales no son Jueces, que aquéllos no son otra cosa que los defensores del Gobierno en los casos en que la Confederacion es parte, y que concediendo á los Fiscales la inamovilidad, se dejaría al Gobierno desarmado para gozar de las ventajas de esta ley. Por esto extraño, señor, que se haya hecho tanto escándalo de una cosa tan comun.

El señor Gordillo (D. Vicente): He pedido la palabra para declarar que encuentro muy fundadas las observaciones hechas por el señor Ministro, y que votaré por la inamovilidad de los Fiscales, excusándome de hacer algunas observaciones para fundar mi voto, por creer muy agotada esta discusion.

El señor Garzon: Como se ha dicho, es indudable que la Constitucion nada establece terminantemente respecto de la inamovilidad de los Fiscales; sin embargo, esa condicion es una consecuencia necesaria de la independencia en que debe colocarse á los miembros del Poder Judicial. Veo, pues, como otros señores Diputados, los peligros que seguirian para la recta administracion de justicia, si se deja al arbitrio del Gobierno remover los Fiscales de los Tribunales inferiores cuando no cedan á sus pretensiones. Creo tambien que no es exacta la comparacion que se hace de los Fiscales con los empleados de la administracion, para deducir de ella que el Gobierno tiene derecho á remover aquéllos cuando no cedan á sus exigencias, fundándose en la atribucion 10 del artículo 93. Pero la atribucion 5ª del mismo artículo dice que el Poder Ejecutivo nombra los Magistrados de la Corte Suprema y de los demás Tribunales inferiores con acuerdo del Senado. Bien, pues, si los Fiscales son miembros de esos Tribunales porque ejercen atribuciones judiciales, es claro que están en el caso de los Jueces, y que no pueden ser removidos por el Ejecutivo sin acuerdo del Senado. Por esta razon la atribucion que se invoca no expresa á los Fiscales entre los empleados que el Poder Ejecutivo nombra y remueve por sí solo. Es claro entonces que están en el caso de los Jueces y que no pueden declararse amovibles.

Esta es, señor, la única interpretacion que se puede dar á los artículos constitucionales que tratan de esta materia, y no sé como se quieren extender las atribuciones del Ejecutivo hasta la facultad de remover á su arbitrio los Fiscales que son, como los Jueces, miembros del Poder Judicial. Creo, pues, que no deben declararse amovibles los Fiscales desde que además de las consideraciones que he aducido, el Ejecutivo tiene derecho de quejarse ante la Corte de Distrito, y pedir que se aplique la ley á un Fiscal que por negligencia ó mala fé se niegue á defenderlo.

Dado el punto por suficientemente discutido, se puso á votacion el artículo 38 propuesto por la Comision y resultó rechazado por una mayoría de veinticuatro votos contra tres.

Puesto á votacion el artículo correspondiente sancionado por el Honorable Senado fué igualmente rechazado.

Se leyó el artículo 32 del proyecto del

Ejecutivo, su tenor es el siguiente: «Los Jueces Federales, tanto los miembros de la Corte Suprema como los de las Cortes de Distrito y los de 1ª Instancia, son inamovibles de su destino durante su buena comportacion.»

El señor Ministro expuso que la palabra 1ª Instancia debía sustituirse con la de Seccion, y hecha esta sustitucion en el artículo, se votó y fué aprobado por afirmativa de veinticuatro votos contra tres, quedando consignado en la ley bajo el número 38.

Acto continuo se pasó á cuarto intermedio.

Vueltos los señores Diputados á sus asientos, se puso sucesivamente á discusion y votacion el artículo 39, y fué aprobado por unanimidad; su tenor es el siguiente:

Art. 39. Cuando los miembros de la Corte Suprema sean encausados con arreglo al artículo 41 de la Constitucion, quedarán suspensos desde que se pronuncie la declaracion de haber lugar á formacion de causa, segun el mismo artículo.

Se puso en discusion el artículo 40, su tenor es el siguiente:

Art. 40. Los miembros de las Cortes de Distrito y los de los Juzgados de Seccion solo podrán ser depuestos por sentencia, previo juicio legal; pero serán suspensos por el auto que declara haber lugar á proceso.

El señor Funes: La Comision no tiene inconveniente en aceptar la modificacion que se propone desde que ella no afecta la esencia del artículo.

El señor Gordillo (don Vicente): Estoy conforme con el artículo tal como lo propone la Comision, porque lo creo muy bien redactado en esos términos, desde que los empleados á que se refieren no pueden retener un empleo sin aceptarlo antes. Por consiguiente, tanto importa decir en caso de aceptacion ó retencion, ó bien en caso de aceptacion.

El señor Ministro pidió se leyese el artículo correspondiente del proyecto sancionado por el Honorable Senado, y leído que fué continuó.—Desearia que se hiciesen dos modificaciones en este artículo, es decir, que en la 1ª parte se suprima la palabra «y Fiscales», porque no hay razon para comprender á éstos en esa disposicion, desde que no pudiendo administrar justicia no existe respecto de ellos el mismo inconveniente que en los Jueces para aceptar cualquier otro empleo ó comision; porque de lo contrario habria la misma razon para privar á los demás administradores de ejercer otro empleo ó comision.

Deseo tambien que la Honorable Cámara acepte la excepcion que contiene el artículo del Senado, es decir, que los Jueces puedan aceptar una mision diplomática en el exterior con beneplácito de la Suprema Corte, quedando duran-

te su nuevo destino y desde su aceptacion, sin ejercicio de sus funciones judiciales.—Los derechos de la Nacion que se refieren á sus relaciones exteriores son muy graves é importantes, porque se rozan con sus derechos mas altos, con su paz exterior, con su independencia. Bien pues, las misiones diplomáticas exigen hombres especiales, no solo en sus conocimientos, sino hasta en las circunstancias personales, siendo por esta razon muy pocos los hombres aptos para desempeñarla, mucho mas en países nuevos como el nuestro. Creo por esta razon que seria una imprevision por parte de la Honorable Cámara quitar al Gobierno el derecho de buscar esos hombres especiales entre los Ministros mismos de la Suprema Corte ó los Jueces que han de desempeñar los demás Juzgados Federales; porque estamos viendo todos los días que esas cuestiones de derecho internacional de que se ocupan los Ministros Plenipotenciarios son mejor comprendidas por las personas que ejercen funciones judiciales. Observe tambien la Honorable Cámara que las atribuciones de estos Ministros no pueden complicar su juicio como Jueces para la solucion de causas contenciosas dentro del territorio de la Confederacion. En las naciones mas ricas de personas competentes para el ejercicio de negociaciones exteriores se observa que son muy pocos los individuos á quienes se les confía la alta mision de representar á su país cerca de un Gobierno extranjero, porque como he dicho antes, se requieren individuos que sean una especialidad, no solo en conocimientos, sino en sus circunstancias personales.

Me ha movido tambien á proponer esta excepcion la idea de que en otros países sucede lo mismo, y que frecuentemente salen para misiones diplomáticas hombres del seno de la Justicia. En todo lo que se refiere á relaciones exteriores la Honorable Cámara debe tener mucho cuidado en dejar al Gobierno la libertad de elegir un Ministro entre el círculo mas extenso posible de personas competentes; porque si esto es aceptable en otras partes, lo es mucho mas entre nosotros, que carecemos de hombres idóneos para esas altas misiones diplomáticas que requieren una educacion especial.

Creo, señor, por estas razones que la Honorable Cámara debe aceptar la excepcion que propongo.

El señor Funes: El señor Ministro ha reconocido como principio que la independencia de los Jueces es necesaria.

Pero no solo es necesario que sean independientes y honrados, no solo que estén libres de la censura, sino de toda sospecha respecto de su independencia. Bien pues, además de que una mision diplomática no

puede ser un halago para un Juez de la Suprema Corte, porque es difícil que le proporcione mayores ventajas, y si solo para los Jueces inferiores á quienes conviene mas cualquiera mision diplomática, debemos librar á esos Jueces de toda clase de móvil que pueda poner en duda su independencia.

Con respecto á las mejores aptitudes que el señor Ministro supone en los Jueces para desempeñar misiones diplomáticas, no soy de su opinion, porque esos funcionarios, por el carácter que revisten, no están tan acostumbrados á la sociedad, ni tienen ese conocimiento del mundo que se requiere en los diplomáticos para que puedan introducirse en todas partes y portarse con la habilidad del cortesano. Pero un Juez que por su carácter debe ser siempre tan severo en sus costumbres y modelos, es sin duda poco adecuado para hacer un buen diplomático. En cuanto á la escasez de hombres idóneos para desempeñar misiones diplomáticas, siempre se hará sentir; pero si se supone que iremos en progreso debe suponerse tambien que esos diplomáticos se irán formando poco á poco, y que los jóvenes mismos que van á otros países en esa escuela serán muy hábiles diplomáticos; pero no puede serlo un Juez que sale de su bufete para desempeñar una mision diplomática. Creo pues, que no se perderá mucho con no consignar en el artículo la excepcion que propone el señor Ministro. Además, si se tiene en vista que son nueve solamente los Jueces Federales que pueden emplearse en misiones diplomáticas de importancia cuando hay tantos otros argentinos idóneos para desempeñarlas, se notará menos la necesidad de esa excepcion. Como se vé, pues, no hay inconveniente en la práctica para que se omita la excepcion propuesta. Además, como he dicho antes, es preciso garantizar á esos Jueces hasta de la sospecha de que no ejerzan sus atribuciones con entera independencia.

El señor Ministro: Tengo mucho interés en que los que han de ser Jueces de los Tribunales Federales estén libres de toda sospecha sobre su independencia; deseo que se conserven retirados del manejo de los negocios; quisiera separarlos de la sociedad ante quien tienen que juzgar, y por esa razon no quisiera que los Jueces Federales puedan aceptar otro empleo en el interior de la Confederacion. Pero es muy distinta cosa una mision al Exterior, porque en este caso un Juez no lleva el riesgo de ver gastado su prestigio ante la opinion de los individuos mismos que tiene que juzgar, cuando sale del país representando la soberanía de la Nacion; porque esto mas bien los eleva á mayor altura sacándolos fuera de la consideracion vulgar de los hombres. He ahí, señor, por qué esta

clase de empleos, en vez de perjudicar á los Jueces, los hace mas dignos de consideracion y aceptables, por lo mismo que han merecido representar la soberanía de la Nacion en otros países. Es, pues, una conveniencia que esos Jueces sean rodeados con toda clase de consideraciones para garantir esa respetabilidad de que la carta ha querido rodearlos.

La necesidad que hay de sustraer á los Jueces del conocimiento práctico de los negocios en el interior de la Confederacion, no es aplicable á las misiones que éstos puedan desempeñar en el exterior, porque éstas no pueden tener relacion con los asuntos en que tienen que fallar como Jueces. Es tanta la extension que debe darse á este principio, en mi concepto, que no solo debe dejarse al Gobierno la facultad de mandar á los Jueces de la Suprema Corte y demás Tribunales Federales en misiones diplomáticas al exterior, sino permitirse tambien que aquellos puedan tomar parte en la enseñanza pública regentando algunas cátedras en las universidades. ¿Qué inconveniente habria en que un Juez de Seccion, por ejemplo, enseñase matemáticas ó cualquiera otra ciencia en un colegio nacional?

Es verdad que muchas veces una mision diplomática no es tan difícil ni tan grave que no tenga la Nacion muchos individuos capaces de desempeñarla; pero debe tenerse presente que hay ciertas misiones que deben ser desempeñadas por un individuo elegido entre veinte diplomáticos porque es una especialidad para ese caso, y porque tal vez no habria uno tan á propósito para ese caso aunque fuese la primera mision que hubiese de desempeñar, porque el señor Diputado á quien contesto comprenderá que un diplomático puede ser muy apto para desempeñar una mision en Londres y no en la Banda Oriental ó en el Paraguay, puesto que es preciso consultar las inclinaciones, relaciones y demás circunstancias que constituye una especialidad en ciertos individuos para desempeñar tal ó cual mision.

La Honorable Cámara, pues, no debe prescindir de todo esto para salvar un principio que, aunque bueno, admite una excepcion que no puede ser perjudicial.

El señor Ferreyra: Todas las razones aducidas por el señor Ministro tienden á probar la necesidad de conceder al Gobierno la facultad de encargar misiones diplomáticas en el exterior á los miembros del Alto Poder Judicial, porque como ha dicho el señor Diputado informante respecto de los Jueces inferiores, no puede dudarse que mas les conviene ser Ministros plenipotenciarios cerca de un gobierno extranjero que Jueces de Seccion ó de distrito. Pero esto, señor, no es necesario que

se establezca todavía, ese caso llegará de suyo por la naturaleza misma de las causas; eso se hará cuando el país necesite de tal manera de los servicios de esos Jueces que los que pueda prestar uno de ellos no sean recompensados por otro alguno de los muchos individuos capaces que tiene el país. Esto en cuanto á la conveniencia que resulta para los Jueces de la excepcion que propone el señor Ministro.

Respecto á las razones de conveniencia para el país, yo no veo ninguna para que se aleje á los Ministros de la Suprema Corte de los difíciles y no menos delicados asuntos de que ese Tribunal tiene que ocuparse, y que creo mucho mas rigurosos que los de los agentes diplomáticos, porque suponiendo el caso de que el país se declarase en conflicto con un Poder extranjero, podria llegar tambien el de que la Corte Suprema trajera la guerra con sus grandes males á causa de uno de sus fallos, que acaso habrian podido evitarse con las luces de los miembros ausentes. Si en esos casos, pues, en los Jueces de la Suprema Corte se requiere una inteligencia tan superior, es claro que mas inteligencia se necesita para ser Ministro de la Suprema Corte que para diplomático. Creo, pues, que no debe distraerse á los miembros del Alto Poder Judicial de la noble y honrosa mision que la Constitucion les ha confiado para desempeñar otros empleos para los cuales no han sido creados ni están preparados. Por estas razones no adhiero, señor, á la excepcion propuesta por el señor Ministro.

El señor Alvear: Conforme con el artículo tal cual lo propone la Comision no aceptaré la excepcion que contiene el del honorable Senador. La carrera de la jurisprudencia es una carrera especial, que requiere por consiguiente conocimientos y una práctica especial; la carrera diplomática es muy distinta, y aunque hasta ahora no haya una ley que fije las condiciones necesarias para optar á los puestos diplomáticos, existe, como he dicho antes, entre una y otra carrera una diferencia muy notable.

Las causales que se alegan para esta excepcion no pueden ser bastantes, porque pueden alegarse para la opcion de cualquiera otro empleo, y si hay razones de conveniencia para encargar á los Ministros de la Suprema Corte misiones diplomáticas en el exterior, no las hay menos poderosas para no distraer á esos funcionarios de la importante mision que deben llenar en nuestro país, mucho mas cuando está expresamente probado que los Ministros de la Corte Suprema no pueden desempeñar cualquiera otro empleo ó comision en el interior de la Confederacion. Bien pues, en ese caso están las misiones al exterior porque vendrian á distraer las ideas de

los Jueces de su mas importante ocupacion, la de administrar justicia en el país. ¿Quién llenaría, señor la vacante que dejase un Juez? ¿El Presidente de la Corte de Distrito? Quedaría tambien ese tribunal incompleto, y éste sería reemplazado por un abogado cualquiera. Sobre todo, señor, esta excepcion se opone á la calidad de inamovibles que hemos establecido para los Jueces de la Suprema Corte.

Además de esto, señor, como he dicho antes, la carrera de la magistratura es muy distinta de la diplomática; yo he estado en el exterior, y puedo declarar que muy rara vez he encontrado magistrados judiciales desempeñando el rol de agentes diplomáticos. Sería pues mas fácil que un Juez tuviese aptitudes para ser Diputado ó Senador que agente diplomático, porque además estando á la mano podrá cumplir mas bien con sus obligaciones de Juez que yendo al extranjero en una carrera completamente distinta de aquella en que tiene conocimientos y práctica.

Desearía, pues, que el Ejecutivo presentase una ley reglamentando esta carrera especial, en la que deben educarse desde su juventud esos hombres que están destinados á desempeñar un rol tan importante. Pero no querría que tan luego los Jueces de la Suprema Corte, que son inamovibles de su destino, y que deben residir en esta capital, fuesen enviados al exterior en misiones diplomáticas.

El señor Ministro: Las misiones diplomáticas al exterior no tienen la misma aplicacion que los empleos ó comisiones que se desempeñan en el interior de la Confederacion, porque aquellas no complican la persona del Juez con los casos judiciales en que tiene que entender el Tribunal.

Si un Juez fuera nombrado Administrador de Aduana, por ejemplo, tendría que juzgar ó fallar en actos propios ó de sus colegas. No puede suponerse entonces en ese Juez libertad é independencia en sus juicios desde que al mismo tiempo que ejerce sus atribuciones judiciales es miembro del Poder Ejecutivo. Pero cuando se le confia una mision diplomática en el exterior, entonces ese Juez no está mezclado con las pasiones y con los intereses de la localidad.

Al proponer esta excepcion no solo me he referido á los Jueces de la Suprema Corte sino de todos aquellos en quienes el Gobierno puede aprovechar sus cualidades especiales; ni he pretendido que los Jueces Federales deban ser ocupados en misiones diplomáticas con preferencia á otros, porque tengan mas profundos conocimientos en esta carrera, sino porque se observa generalmente que en el gremio de los abogados se encuentran mas personas de conocimientos teóricos sobre el particular y mas prácticas en los negocios.

Deseo únicamente que no se estreche demasiado el círculo de hombres idóneos de que el Gobierno puede disponer para las negociaciones exteriores, y menos ahora que todavía se siente la escasez de individuos caracterizados para ese objeto. Por otra parte son indudablemente mas graves los intereses de la Nacion en el exterior que los intereses personales que se ventilan ante los Tribunales Federales. Por consiguiente, aunque esta excepcion importe una diferencia en el principio de que los Jueces no deben ocuparse de otra cosa que de administrar justicia, debe entenderse que pueden ocuparse fuera del país de asuntos de mayor gravedad.

El señor Soria: Votaré en oposicion á la modificacion propuesta por el señor Ministro y en favor de la última redaccion que aceptó la Comision, y hago mocion para que se dé el punto por suficientemente discutido.

Habiendo deferido la Honorable Cámara á esta mocion se puso á votacion el artículo 41 con la modificacion propuesta por el señor Araoz, que aceptó la Comision, y fué aprobado por mayoría.

Se puso en discusion el artículo 42; su tenor es el siguiente.

Art. 42. Cuando un impedimento cualquiera inhabilite á un Juez para ejercer su destino, el Gobierno nombrará un Suplente conforme al artículo 83, inciso 5º de la Constitucion.

A indicacion del señor Ministro, á que adhirió la Comision, se sustituyó en este artículo la palabra «Gobierno» con la de *Poder Ejecutivo*.

El señor Soria hizo mocion para que se levantase la sesion por ser la hora avanzada, y habiendo sido suficientemente apoyada esta mocion, se procedió á votar sobre ella y resultó desechada por la mayoría.

Puesto á votacion el artículo 42 con la modificacion propuesta por el señor Ministro y aceptada por la Comision, fué aprobado por unanimidad.

Fué puesto en discusion el artículo 43; su tenor es el siguiente:

Art. 43. Cuando en alguna causa se hallen impedidos para conocer uno ó mas Jueces de la Corte Suprema, serán llamados por su orden para reemplazarlos el Presidente y Vocales de la Corte de Distrito de esta Capital, y en el caso que éstos estén tambien impedidos, los abogados residentes en la Capital por su orden de antigüedad.

El señor Warcalde expuso: Que deseaba saber del señor Diputado informante, si entre los abogados que deben remplazar á los Ministros de la Suprema Corte, suponiendo que se hallen tambien impedidos los Jueces de las Cortes de Distrito, se podía nombrar tambien

á los abogados que no tuviesen las calidades requeridas por esta ley para ser Ministros de la Suprema Corte ó de la de Distrito.

El señor Funes: Que estando prevenido por la ley que los Ministros de la Suprema Corte sean remplazados en caso de impedimento por los Jueces de Distrito, y en su defecto por los abogados residentes en la Capital hasta la escala mas remota, era muy difícil que no llegase el caso de que no se encontrase un abogado con las condiciones requeridas por la ley; pero que suponiendo que llegase ese caso, como el reemplazo de un Juez podía ser urgente, era menos mal que se integrase la Suprema Corte con un abogado que no tuviese todas las condiciones requeridas por la ley, que el que ese Tribunal no pudiese funcionar por falta de Jueces.

Después de esto el señor Warcalde adujo algunas observaciones tendientes á demostrar que era necesario exigir en los abogados que reemplacen á los Jueces las mismas condiciones que en éstos, á las que contestaron los señores Funes y Ferreyra.

Dado el punto por suficientemente discutido se puso á votacion el artículo 43 y resultó aprobado por mayoría.

Se puso en discusion el artículo 44, su tenor es el siguiente:

Art. 44. Cuando uno ó dos Vocales de la Corte de Distrito se hallen impedidos para el conocimiento de un asunto, se llamará para integrar al Tribunal por órden de antigüedad á los abogados matriculados en el lugar de la residencia de aquél. En el caso de im-

pedimento de los tres Vocales la causa pasará á la Corte de Distrito mas inmediata.

El señor Garzon pidió explicaciones sobre la inteligencia que daba la Comision á la frase de *abogados matriculados en el lugar de la residencia de aquél*; y dadas que fueron aquellas por el señor Funes en el sentido de que debía suponerse que en cada localidad donde hubiese una Corte de Distrito debía haber tambien una matrícula de abogados, se suscitó un breve debate entre los señores Diputados Alvear y Gordillo que impugnaron el artículo en la parte observada por el señor Garzon y el señor Funes que lo sostuvo.

El señor Ministro propuso entonces que se sustituyese la frase de *abogados matriculados en el lugar de la residencia de aquél*, con esta: «á los abogados nacionales que se hallen en el lugar de la residencia de aquél.»

El señor Araoz hizo mocion para que se diese el punto por suficientemente discutido, y habiendo sido apoyada esta mocion se votó sobre ella y resultó desechada por mayoría.

Acto continuo se pasó á cuarto intermedio.

Vueltos los señores Diputados á sus asientos, el señor Gordillo, (D. Vicente), hizo mocion para que se levantase la sesion por ser la hora avanzada, y habiendo deferido la Honorable Cámara á esta mocion, se levantó aquella siendo las cuatro y media de la tarde.

M. LUQUE.

Benjamin de Igarzabal,  
Secretario.